

09 mayo 2013

Conclusiones

La libertad de prensa empeoró en el hemisferio estos últimos seis meses, por cuanto los violentos enemigos de siempre de la libertad de expresión cobraron nuevas víctimas entre los periodistas, mientras que los gobiernos populistas que siguen los dictados del presidente venezolano Hugo Chávez intensificaron sus campañas de abuso y ridiculización de las empresas mediáticas y sus reporteros. Levantándose imponente ante estos desarrollos ha surgido una crisis en la industria periodística de los Estados Unidos que amenaza con debilitar su papel crucial como guardián vigilante de los casos de corrupción tanto en el gobierno como en el sector privado.

Seis periodistas fueron asesinados en las Américas aparentemente por cumplir con su labor periodística en estos seis últimos meses desde que la Sociedad Interamericana de Prensa se reuniera en Madrid. Un periodista fue asesinado en Venezuela y otro en Paraguay.

Sin embargo, México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para los periodistas, ya que cuatro de ellos fueron asesinados y hubo otros ocho ataques contra periodistas o sus centros de trabajo. Hasta los camiones de reparto de diarios han sido blanco de organizaciones criminales en su intento por silenciar a la prensa. Lamentablemente, su accionar está dando frutos: la auto censura es una realidad en la prensa mexicana. Una iniciativa planteada por la SIP para hacer que los crímenes contra la libre expresión constituyan un delito federal se fue a pique a principios de marzo en la Cámara de Diputados de la nación. Mientras tanto, crímenes que permanecen impunes, como el perpetrado hace cuatro años contra Alfredo Jiménez Mota, periodista del diario *El Imparcial*, de Sonora, son un testimonio de dicha impunidad. En su reunión de medio año, la SIP presentó el caso de Jiménez Mota ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo éste el 24° caso que ha presentado ante dicho organismo.

Una nota positiva entre tantas noticias lúgubres de violencia, es que Colombia, país que en su momento fue uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, sigue sin registrar un solo caso de asesinato de periodistas.

Son más los gobiernos que ahora no solamente están abusando de la prensa, sino que están avivando activamente las llamas del odio. En Venezuela, el Presidente Chávez ha seguido con su indesmayable tarea de humillar oficialmente a la prensa. Su retórica tiene consecuencias reales, tal como se ha podido ver en los violentos ataques a reporteros de Globovisión el pasado mes de octubre y el lanzamiento de gases lacrimógenos a las oficinas del diario *El Nuevo País*, ambas acciones perpetradas por el grupo La Piedrita, avalado por el gobierno. Chávez o sus simpatizantes han calificado temerariamente a dos editores de diarios como conspiradores de asesinatos y hasta de "objetivos militares".

Esta táctica ha sido adoptada entusiastamente por otros jefes de estado del hemisferio, como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel Zelaya en Honduras, Álvaro Uribe en Colombia, Oscar Arias en Costa Rica, Álvaro Colom en Guatemala, Lula da Silva en Brasil y el gobierno de los Kirchner en Argentina. Quizás el ejemplo extremo es el gobierno de Uruguay, el cual se ha referido públicamente a los periodistas como "gusanos", "payasos" e "hijos de puta". Durante la reunión de medio año celebrada en Asunción, los delegados de la SIP describieron en varias ocasiones un clima periodístico de "hostilidad" y "tensión", como resultado de implacables campañas de abuso verbal y mofa. Lo más decepcionante ha sido ver la complicidad de ciertas organizaciones mediáticas en los ataques contra la prensa independiente de sus países. La SIP hace notar que las empresas de radio y televisión que Ángel González opera ahora en nueve países latinoamericanos han sido grandes infractores que se han puesto de lado del gobierno de turno independientemente de su orientación política y han aplaudido sus campañas contra las organizaciones periodísticas independientes.

Son demasiados los gobiernos que siguen recurriendo a la publicidad oficial como una manera de castigar a los medios independientes y a la vez recompensarlos cuando publican notas editoriales a su favor.

Las esperanzas de que el cambio de régimen de Fidel Castro a su hermano Raúl podría relajar la represión de la libertad de expresión que ha existido durante medio siglo en Cuba, se vieron truncadas en varias ocasiones durante estos últimos seis meses. Unos 26 periodistas independientes, varios de ellos en un precario estado de salud, permanecen tras las barras, cumpliendo sentencias de hasta 28 años de prisión. Es más, los 86 incidentes de violencia registrados contra periodistas durante este período representan un recrudecimiento del grado de abuso existente.

Hay un mayor número de países que están adoptando leyes a favor de la libertad de información o cambios a sus leyes sobre difamación, pero lo que podría ser una tendencia alentadora, ha generado más bien cierto desaliento ya que hay gobiernos, como los de Panamá y Costa Rica, que han hecho muy poco por abrazar el espíritu o la práctica de la transparencia. En los Estados Unidos, el Presidente Barack Obama fijó un nuevo tono de transparencia el primer día de su mandato, cuando declaró que los organismos del

gobierno deberían atender todas las solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información, a menos que existan claras evidencias de que la revelación de dicha información atente contra los intereses nacionales.

Mientras la SIP apoya fuertemente un clima diverso y de muchas voces para los medios de comunicación, también observa con alarma la creciente práctica de los gobiernos de crear o manipular centros de transmisiones y publicaciones para convertirlos en brazos de propaganda.

La crisis económica y los cambios tecnológicos en la industria periodística de los Estados Unidos han provocado que miles de periodistas pierdan sus trabajos y que varios diarios importantes cierren definitivamente o se declaren.

en quiebra. La SIP teme que el debilitado estado de los diarios podría afectar seriamente su histórico rol como vigilantes del gobierno y la sociedad.
